

El retorno a la ciudad herida

ANTONIO FERNÁNDEZ ALBA

*En recuerdo de los hombres y mujeres
que, en 1933, hicieron posible la pro-
mulgación de la ley para la Protección
del Patrimonio Artístico y Arquitectó-
nico.*



EL RETORNO A LA CIUDAD HERIDA

(Hacia una política revitalizadora del Patrimonio Arquitectónico)

Se ha conmemorado durante el mes de mayo de 1983 los cincuenta años de la promulgación de una ley (1933) que en España pretendía acoger bajo su articulado la defensa y recuperación de un patrimonio histórico que la incultura de siglos entregaba degradado a la dinámica devoradora de la planificación industrial con la que se inauguraba el siglo, tal vez uno de los procesos de expansión y desarrollo más significativos de la historia occidental. Este crecimiento sería solidario de la destrucción del patrimonio construido, lamentablemente más generalizado que el impacto sufrido por los conflictos bélicos en la Europa del 14 y el 45, dos guerras de rasgos tan elocuentemente destructores, como se pueden leer en los documentos gráficos que sobre estos conflictos nos describe la historia visual de nuestros días.

Los textos que documentan las vicisitudes por las que ha transcurrido la herencia patrimonial en las ciudades de España, nos muestra, por lo general, un marcado desinterés por lo histórico y un abandono casi sistemático. No es raro encontrar, junto a los escasos catálogos del patrimonio edificado, los correspondientes volúmenes que recopilan la crónica de los monumentos y conjuntos que han desaparecido. El patrimonio del

estado, las importantes propiedades del poder eclesiástico y los reductos no menos significativos del ámbito privado, carecen a lo largo de los años de una protección eficiente. Las leyes se promulgan, pero apenas se cumplen, la trasgresión es fácil y la sensibilidad escasa, haciendo del marco legal un corolario de referencias institucionales, apto siempre para ser vulnerado con el menor pretexto.

El patrimonio histórico en España ha sido objeto de una agresión permanente, desamortizaciones demagógicas, intereses privados y públicos dispuestos a dilapidar la memoria de la historia, cuando no a justificar mediante gestos de ritualización ambiental crecimientos indiscriminados de la ciudad. El suelo de los núcleos históricos de la mayor parte de nuestras ciudades, durante estos cincuenta años, fue presa codiciada de una colonización del mercado inmobiliario. Sometido desde principios de siglo a una presión ideológica, según la cual «la historia» debería entenderse como acumulación *simbólico-formal* de la realidad, y «la modernidad» en su versión *mechanicista-económica*, como una apropiación de esa realidad. Esta ideología ha permitido que los constructores de la ciudad contemporánea se transformaran en sus destructores más refinados. Para poco sirvieron las advertencias de los teóricos de la utopía urbana que, en los finales del siglo pasado, manifesta-

ban con evidente insistencia la necesidad de consolidar el patrimonio construido, y nos señalaban cómo la mentalidad capitalista es solidaria de un rechazo primario por la historia. Ya entonces les resultaba evidente que el capital cuando no puede transformar el espacio, lo integra, asimilando el espacio histórico como un verdadero *supermarket*-simbólico. La tesis fundamental para la construcción de la ciudad capitalista, ha tenido desde sus orígenes una finalidad muy concreta. Su *planificación*, es una estrategia de reproducción de plusvalías, y los factores básicos *suelo* y *capital* deben atender a potenciar sus beneficios desde una óptica estrictamente mercantil.

El patrimonio construido que albergaba las ciudades de España, no pudo superar la prueba a la que fue sometido por el desarrollo de tales principios, y en una valoración retrospectiva tendremos que aceptar que sus consecuencias han sido más negativas que las de las ciudades europeas, pues este patrimonio se vio inmerso en una caótica expropiación de territorios, espacios, símbolos y lugares sin el menor escrúpulo. La tipología ambiental recibida del urbo-capitalismo ha dejado patente que su mediación para formalizar el espacio de la nueva ciudad, era producto del valor del terreno y de la optimización de su consumo, lo que significaba tanto como evidenciar que *el espacio* jamás se podría configurar como *lugar* bajo sus premisas.

La arquitectura, por tanto, quedaría excluida de la ciudad y el arquitecto sin papel concreto de intervención, el camino quedaba preparado para la disolución y fragmentación espacial. La megápolis moderna solamente requeriría para su formalización ambiental elevar a paradigma el bloque de la «doble cruja». Cincuenta años de esfuerzos aislados a la búsqueda de acciones culturales, de adquisición de instrumentos de intervención con que paliaran los efectos de destrucción sobre el rico patrimonio heredado, o bien gestos de buena voluntad que pudieran salvar los reductos de la historia que no fueron avasallados. Los tiempos de la lucha ciudadana, de las normativas técnicas, de la responsabilidad eficiente o de la capacidad eficiente, son capítulos registrados en la triste crónica del espacio perdido.

Estos son otros tiempos, pero, ¿se podrá controlar el proyecto global que requiere el patrimonio histórico, ahora, en beneficio de la colectividad y como transferencia cultural para los nuevos usos de la sociedad de hoy?

El simple ejercicio de habitar la ciudad, demuestra con evidentes rasgos de fidelidad, que no sólo habitamos espacios sin cualidades, sino que discurrimos por lugares sin referencia ni situación, que compartimos nuestras ciudades bajo la tiranía del vacío enajenado, como territorios sin sentido concreto ni posible identificación. Truncada nuestra historia

y abolida la memoria, los hombres de hoy desean y necesitan la recuperación del lugar.

El ciudadano es consciente que las fronteras naturales de la ciudad burguesa fueron barridas por los cometidos de la intensiva planificación desarrollista, pero a veces en torno a estos lugares comunes de la denuncia crítica, no se reflexiona sobre otros factores más allá de la destrucción de los edificios y que degradaron la cualidad del espacio urbano o el medio natural. Al introducir en los procesos de desarrollo, tecnologías de un alto coste de energía, toda la espacialidad sufrió un cambio cualitativo, que afectó al hábitat en general y al sentido de la vida en proporciones muy significativas. La tarea de restitución por tanto no parece que deba orientarse añadiendo mayores técnicas de persuasión, sino más bien enfocando las demandas como una restitución consecuente, que permita legalizar un *proyecto global de recuperación* del hábitat de hoy en los espacios de la sociedad industrial contemporánea. Proyecto que parece evidente no puede venir avalado por una «cosmética restauradora» y menos aún desde una política de rehabilitación parcial de la espacialidad histórica, es decir, políticas que permitan transformar estas decisiones en los principios de una «nueva ideología urbana», que haga de la rehabilitación un factor que genere inéditas plusvalías por medio de la modalidad histórica.

Se suscita por tanto, y en primer lugar, que la mirada hacia el *Patrimonio Construido* en su sentido más amplio, supere y trate de evaluar los excesos del crecimiento infinito para con los límites de la ciudad y su incidencia en el territorio. Entender la realidad urbana existente y las demandas de su crecimiento futuro como un todo a equilibrar, y cualificarlo como ámbito y reducto de lo humano, administrando el flujo de energías que el hábitat contemporáneo promueve. Interpretación, por tanto, de los lugares históricos como un *continuum espacial* que nos permita distinguir, destacar y diferenciar los valores propios de una *cultura historiográfica espacializada*, de aquella otra que manifiesta sus principios en la *realidad antropológica*.

La nueva cultura emergente de las sociedades modernas suscita, no la restitución y conservación activa generalizada, cuyos cometidos se presentan como imposibles, sino el desarrollo previo de una *teoría de la evaluación patrimonial*, que establezca mediante diagnósticos diferenciales rigurosos, donde comienzan los *valores culturales reales* y donde concluyen los *significados históricos atribuidos*, pues esta diferenciación selectiva permitirá comprender mejor la *historia* como biografía comunitaria, y el *espacio* como proceso enraizado en el imaginario colectivo.

Una lectura neutral de lo que han significado estos cincuenta años de gestión restauradora, nos advierte

que los objetivos de acciones positivas vienen vinculados a una sincronización de contenidos políticos, económicos y culturales, dentro de una coherencia planificada cuyo postulado evidente señala que la ciudad se construye a través del poder económico-social, de la experiencia cultural y de la ciencia acumulada en los tiempos largos de la historia.

Vivimos hoy en España la consolidación de un modelo de estado, más afín con la dimensión antropológica de nuestra realidad cultural, al mismo tiempo que nos aproximamos a la formalización de un arquetipo de sociedad, en contraposición manifiesta con el medio construido que nos han legado los crecimientos infinitos de las sociedades industriales. Esta actitud beligerante trata de asentar los principios de una convivencia plural, equilibradora entre espacio social y medio natural, premisas bastante elocuentes que afectan a los enfoques normativos sobre el patrimonio cultural.

Estamos por tanto en el umbral de un proyecto nuevo por lo que se refiere al concepto y definición de una *política cultural del estado*, y en este cometido tendremos que aceptar, por el momento, que no existe ningún rasgo que lo caracterice como tal. Es cierto que han sido muchos los esfuerzos y energías destinados a poner al día un país enrarecido por acontecimientos endémicos en la conducta y hábitos de su convivencia, pero no es menos cierto que no

se podrá seguir por mucho tiempo exhumando reliquias, porque una política de la cultura en el estado moderno, no puede estar supeditada a mitificar la nostalgia o subvencionar «la mixtificación artística», sino a proporcionar objetivos de acción que faciliten el espacio social correspondiente para que pueda desarrollarse la libertad creadora; de aquí esa necesidad de un proyecto global que permita incorporar la genuina cultura, como algo consustancial a la naturaleza de los tiempos que vivimos.

Por cuanto se refiere a la normativa y al control patrimonial parece evidente superar los viejos encuadres legales, que si bien tuvieron vigencia, al menos como programas protectores, ley de 1933, en la actualidad se encuentran superados. No es el *principio de restauración* como política primordial el que permitirá recuperar el espacio, pues un edificio o conjunto histórico que mantiene sus espacios obsoletos en los usos y con una rentabilidad no actualizada, hace inviable la operación restauradora. Son muchos los ejemplos que nos advierten, que el costo de toda reconstrucción física debe ir acompañado de un nuevo contenido de uso, de un cambio de función, que permita una rentabilidad actualizada del espacio.

La restauración según los esquemas tradicionales, reconstruye la forma de los espacios primitivos, la rehabilitación recupera estos espacios y les confiere nuevos usos, haciendo

posible que los lugares restituidos puedan tener una utilización tanto sincrónica como diacrónica del espacio, lo que es tanto como señalar que el *costo del patrimonio restaurado* debe estar en relación con la *planificación del patrimonio rehabilitado*, y esta ecuación lleva implícita una sincronización de los contenidos políticos, económicos y culturales. Tres prioridades que no siempre están presentes en las urgencias de la gestión y en los objetivos de acción de las normativas patrimoniales.

En la geografía de nuestro «Patrimonio Nacional», están aún por concretar las necesidades de una *cultura básica*, de una *planificación político-administrativa* que sea coherente con la rentabilidad de los *costes socio-culturales*, y que no ignore la calidad del proyecto *arquitectónico-urbanístico* sobre el que descansa la operación rehabilitadora. Queda por inventariar de manera científica las dilatadas *cornubaciones* histórico-monumentales, las singulares reservas paisajistas, los grandes yacimientos arqueológicos y los efectos que la indiscriminada evolución urbana ha producido sobre riqueza tan singular.

¿A qué circunstancia histórica esperamos para comenzar a ilusionar las demandas de un colectivo nacional que desea *legitimar* desde este proyecto general su memoria y biografía, y rescatar la historia verdadera de tanta desidia, improvisación, oportunismo y espontaneidad?

EL DESAFIO URBANO

La ciudad, desde los acontecimientos ya lejanos de la revolución industrial, no se ha recuperado del trauma ambiental que sufrió como consecuencia de tan significativo acontecimiento, de tal manera que las relaciones del hombre con su espacio más inmediato, sus objetos y sus semejantes en el ámbito de la ciudad, apenas le permite contabilizar como hechos que pertenecen a sus formas de vida. El tiempo de la ciudad, sin medida ni sosiego, el espacio sin escala adecuada, resaltan como imágenes primarias en ese gran caleidoscopio que resulta ser la ciudad y que traduce las sensaciones en ficción, o las emociones en estereotipos. El ámbito de lo urbano carece de lo que en otros tiempos se consideraba como el «lugar» más razonable para la convivencia.

Su historia más reciente manifiesta los efectos de los modelos de crecimiento rápido, que desde los supuestos teóricos de la ciencia urbana pretendían ofrecer una respuesta a la configuración del espacio físico de la ciudad, en un esfuerzo conceptual para encajar hipótesis planificadoras, que permitieran al menos amortiguar las incisivas actuaciones de las fuerzas económicas que producían el espacio urbano. Día a día hemos podido comprobar como los desnudos bordes de estas concentraciones o sus reductos centrales, desaparecían bajo las presiones de la máquina di-

señada para producir ciudad. Los supuestos metacapitalistas alrededor de la ciudad han dejado bien claro su proceso destructor. No obstante y pese a tanto desastre, junto a los perfiles de este organigrama frío y desolador que ofrece la ciudad herida, un capitalismo envejecido, que no muerto, trata de nuevo inventariar los materiales para reciclar un proceso de reconstrucción de la ciudad, aceptando como modelo de referencia los espacios de la historia abandonada.

En nuestro país asistimos, con expectativa y esperanza generalizada, a los primeros ejercicios que realiza un gobierno cuya adolescencia política puede significar su mayor virtud, que desea poner al día los niveles mínimos de una convivencia plural, en una sociedad como la nuestra, mutilada secularmente por intrigas y fantasmas familiares. Se configura desde las diversificadas administraciones del Estado, los borradores y esbozos para acometer la gestión de la construcción y reconstrucción de la ciudad, abandonada ésta a la promiscuidad física de sus espacios, e inmersa en un deterioro moral en las normas y preceptos de la convivencia de sus habitantes, no debe extrañar por tanto el interés que suscitan estos gestos iniciales.

Los primeros síntomas insinúan la prefiguración de un *modelo de tutela proteccionista* para con la ciudad, con el consecuente retorno a la ciudad histórica, este mensaje sin mayores

expectativas parece imbuido de una cierta limitación. Retocar «la ciudadela asediada» y sanear la periferia sangrante de una espacialidad inconclusa, mediante diagnósticos concretos, sin referencia a un *modelo global de ciudad*. De ser esta consideración cierta, ¿cómo dar respuesta a las perspectivas de la nueva ciudad postindustrial que ya se perfila, tan rica en acontecimientos, imágenes y expectativas, como lo fueron las catedrales grises del primer industrialismo o los pórticos ilustrados del absolutismo mercantil?

Se podrá objetar que estos esbozos planificatorios iniciales se inscriben en una *actitud revisionista*, dentro de la catástrofe urbana que sufre la ciudad hoy en España, cuyos límites bienen marcados por la elección de un *arquetipo de moderación espacial*, que excluya o al menos limite los excesos de la profecía formal y consecuentemente los riesgos de la utopía sin nombre. Este principio teórico que parece animar las decisiones de emergencia, las acotaciones sintéticas para recuperar la ciudad, puede ser válido siempre que no eluda el hecho de poder legalizar un *proyecto global de ciudad*, y no sólo los aspectos parciales de su recuperación coyuntural, pues los postulados que animan la realidad social y las demandas del hábitat contemporáneo se orientan más hacia su calidad ambiental, calidad de vida, que a su simple cobertura física o restitución histórica.

Marginal por tanto la utopía urbana y su correlato de escenarios imaginarios, como materiales para formalizar y construir la realidad de los espacios urbanos de nuestro tiempo, puede desembocar en decepciones significativas y consecuencias dolorosas, entre otras, interrumpir esa «profecía en proceso», la liberación del hombre, cuya morada primaria reside en planear y edificar bien la ciudad desde las exigencias de la cultura de su propio tiempo. Es bien conocido que los espacios ambientales en las sociedades industriales avanzadas aún no han podido superar las dificultades tanto conceptuales como prácticas, para que los presupuestos que subyacen en la actitud científica, como aquéllos otros que residen en la introspección poética, puedan formular una mediación común, que haga posible un reducto urbano habitable. De la misma manera se sabe que este papel mediador, esta demanda peculiar, viene asignada a la gestión política, operación mediadora que el político excluye y a veces transfiere a los equipos técnicos o las instancias jerarquizadas del poder burocrático. Ante la realidad concreta de nuestro país será oportuno preguntarnos. ¿Hacia qué modelo de ciudad nos dirigimos? ¿La multiplicidad de actitudes políticas nacionales, con sus atavismos e incongruencias regionales, tienen alguna evidencia explícita del proyecto de la ciudad común? ¿Existe una política de estado para la ciudad, que independiente de los

gestos de buena voluntad coyuntural, proponga un modelo urbano capaz de aceptar, en lugar de rechazar, la realidad de la ciudad actual y que lleve implícito en su propuesta el significado más positivo del progreso? ¿Se debe considerar como orientadores de esta política urbana, las exposiciones parciales de los planes de actuación y remodelación, que se vienen ofreciendo en el ámbito de algunas propuestas municipales?

«De una ciudad, señala Italo Calvino, no disfrutas las siete u setenta maravillas, sino la respuesta que da a una pregunta tuya». Es muy larga la historia de los remedios puntuales que sobre la ciudad industrial en la que vivimos, se ha pretendido aplicar, propuestas románticas, liberales, naturalistas, positivistas y humanistas, llenan las páginas de la literatura urbana, el resultado fue ese laberinto de bloques, ese infierno de hormigón que estratifica la vida, esa ausencia de lugares sin arquitectura posible.

La sociedad y el cambio hacia que nos dirigimos, se manifiesta en contraposición elocuente al medio construido que hemos heredado, *el desafío urbano* reclama de la gestión política, no respuestas mediatizadas, simbólicas por las intenciones éticas que las animan. El voluntarismo heroico o los excesos entusiastas, son tan nocivos como el miedo al fracaso por imaginar lo inédito. Separar lo que es «la ciudadela asediada» de la *nueva ciudad*, es una ne-

cesidad implícita para realizar cualquier innovación y es una exigencia hacia una política de la ciudad, que debe asumir todos los planos de conocimiento que el desarrollo histórico del país necesita.